

Recurso nº 243/2026
Resolución nº 280/2026

NOTIFICACIÓN

Le notifico que, con fecha 4 de junio de 2026 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha dictado el siguiente Acuerdo:

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación legal de AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. (en adelante, AUREN), contra el acuerdo adoptado por la Mesa de contratación en sesión de 20 de abril de 2026, de exclusión de su oferta de la licitación del contrato denominado "*Consultoría y formación en la norma UNE 158101 para las residencias de personas mayores 2026-2027*", licitado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con número de expediente 089/2026 (A/SER-051607/2025), este Tribunal ha adoptado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Mediante anuncios publicados el día 16 de enero de 2026, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), se convocó la licitación del contrato de referencia mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con pluralidad de criterios de adjudicación.

El valor estimado del contrato asciende a 1.599.000 euros y su plazo de duración será de 22 meses.

A la presente licitación presentaron oferta siete licitadores, entre ellos, la recurrente.

Segundo. - Una vez efectuada la apertura y calificación de la documentación de las ofertas por parte de la Mesa de contratación y abierta la documentación de los criterios de valoración, en sesión de 20 de marzo de 2026, la Mesa identifica como ofertas incursas en presunción de anormalidad, las presentadas por varios licitadores, entre ellos, la recurrente. En consecuencia, se les requiere para que justificaran el precio ofertado o cualquier otro parámetro en base al cual hubieran definido la oferta.

Presentada la correspondiente justificación, se emite informe técnico en fecha 14 de abril de 2026, que resulta asumido por la Mesa de contratación, en sesión celebrada el día 20 del mismo mes, en la que se acuerda considerar debidamente justificado el precio ofertado por parte de los licitadores requeridos, incluida la recurrente. Ello, no obstante, la Mesa acuerda la exclusión de AUREN por incumplimiento de las cláusulas 2 y 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). El acta de la sesión recoge lo siguiente:

*“En particular, la cláusula 2 del PPT establece literalmente que:
(...)*

“Para ello, debe realizarse un total de 1.599 jornadas de consultoría y formación, desglosadas en 1.197 jornadas de consultoría y 402 jornadas de formación, según la planificación aprobada por la persona responsable del contrato, y teniendo en cuenta una duración de 7 horas por jornada de consultoría o de formación.”

Tal y como señala el informe DG de Evaluación, Calidad e Innovación, el equipo propuesto por la licitadora resulta manifiestamente insuficiente para la correcta ejecución del contrato en los términos exigidos en el PPT.

“Por otra parte, la división del precio del contrato (1.599.000 euros) entre la oferta económica hecha (432 euros) da como resultado un total de 3.701 jornadas de consultoría o formación, y, teniendo en cuenta la jornada anual de 1.760 horas, cada persona no podría hacer más de 251 jornadas de consultoría o formación anuales, por lo que el equipo planteado, con 3 personas únicamente, sería claramente insuficiente.”
En este caso, el incumplimiento del PPT debe determinar la exclusión de la licitadora porque se trata de un incumplimiento claro, objetivo, manifiesto y patente y se deduce claramente de la justificación de su oferta.

Por todo ello, la Mesa concluye que el licitador no acredita contar con los medios personales suficientes para la adecuada ejecución de las tareas previstas en el pliego que rige la contratación y determina la exclusión de AUREN CONSULTORES SP S.L.P. (B87352340) del procedimiento de licitación.”

En la misma sesión, se acuerda proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato a BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L.

Tercero. - El 18 de mayo de 2026, la representación de AUREN interpone recurso especial en materia de contratación en el registro de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que tiene entrada en este Tribunal el día siguiente, contra el acuerdo de exclusión de su oferta de la licitación. En dicho recurso solicita la anulación de su exclusión y la adopción, por este Tribunal, de medida cautelar de suspensión de la tramitación del procedimiento.

El 20 de mayo de 2026, el órgano de contratación remitió el expediente de contratación y el informe a que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), solicitando la desestimación del recurso.

Cuarto. - La tramitación del expediente de contratación se encuentra suspendida en virtud de Resolución de MMCC 103/2026, adoptada por este Tribunal el de 22 de mayo de 2026.

Quinto. - La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto de interesados de este contrato, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 56.3 de la LCSP, concediéndoles un plazo, de cinco días hábiles, para formular alegaciones. En el plazo otorgado no se han presentado alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP y el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el presente recurso.

Segundo. - El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, al tratarse

de un licitador excluido, que pretende la nulidad de su exclusión y la adjudicación en su favor, por tanto, sus derechos e intereses legítimos individuales o colectivos se han visto perjudicados o resultan afectados de manera directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso (artículo 48 de la LCSP).

Asimismo, se acredita la representación del firmante del recurso.

Tercero. - Especial análisis merece el plazo de interposición del recurso especial, pues el acto impugnado fue adoptado por la Mesa de contratación el 20 de abril de 2026 y publicada el acta de la Mesa en el Portal de Contratación el 24 del mismo mes. Dicha publicación no contiene mención sobre los recursos a interponer contra los actos contenidos en ella, ni el plazo de interposición.

El mismo día 24 de abril, se publica en el Tablón de Anuncios Electrónico, incluido en el Portal de Contratación Pública, el certificado emitido por la Secretaría de la Mesa de contratación que contiene la exclusión de la oferta de la ahora recurrente, los motivos de exclusión, los recursos a interponer y su plazo. No obstante, lo anterior, en el pie del certificado se recoge literalmente lo siguiente:

“Contra el presente acto de trámite, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o (...)”.

No consta notificación a la recurrente de la exclusión en el expediente remitido por el órgano de contratación, y tampoco alega en su informe indicación alguna al respecto, si bien la recurrente alega que le fue notificado el certificado de su exclusión el día 24 de abril de 2026.

Interpuesto el recurso ante este Tribunal el día 18 de mayo de 2026, se considera interpuesto en tiempo y forma.

Cuarto. - El recurso se interpuso contra un acto de trámite, adoptado en el procedimiento de adjudicación, que determina la imposibilidad de continuar el mismo, en el marco de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros. El acto es recurrible, de acuerdo con el artículo 44.1.a) y 2.b) de la LCSP.

Quinto. - Fondo del asunto. Alegaciones de las partes

1. Alegaciones de la recurrente.

AUREN comienza su exposición manifestando que presentó su oferta por un precio de 432,00 euros (IVA excluido) por jornada, para las 1.599 jornadas exigidas por el pliego. Su oferta se consideró incurso en presunción de baja anormal, por lo que fue requerida para su justificación y, una vez presentada ésta, se emitió informe técnico en el que se consideraba justificado el precio ofertado. Pese a dicho informe, la mesa de contratación excluyó la oferta de la recurrente por entender que el equipo planteado resultaba insuficiente para atender las obligaciones del contrato.

Sostiene la recurrente, que su exclusión no resulta conforme a Derecho al basarse ésta en que su oferta modifica el número de jornadas establecidas en los pliegos, así como su oferta, que necesariamente resultaba ajustada a tal número de jornadas, pues este número no estaba sometido a su libre disposición, y modifica también el criterio de adjudicación basado en fórmulas matemáticas.

De este modo la Mesa ha entendido erróneamente que la bajada del precio ofertado, implica un proporcional incremento del número de jornadas ofertadas, porque el presupuesto del contrato debe gastarse completo; sin embargo, la recurrente explica que no ha ofertado más jornadas que el número fijado en el Pliego, pues tal número es vinculante.

Defiende que el objeto del contrato tiene que prestarse en 1.197 jornadas de siete horas cada una de ellas, pues así se establece sin ambages en el apartado 1 del

Cuadro de Características titulado “*definición del objeto del contrato*” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), así como las cláusulas 1 y 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. De hecho, la proposición económica objeto del Anexo I del PCAP no permite a los licitadores alterar el número de jornadas que oferta, ni las horas de cada una de ellas, siendo el precio por jornada la única variable susceptible de ser concretada por aquellos.

En consonancia con esa regulación, manifiesta que ofertó un precio de 432,00 euros (IVA excluido) para cada una de las 1.197 jornadas exigidas de siete horas cada una de ellas, junto con un equipo de tres personas, cumplimentando en Anexo I antedicho. Y, sorprendentemente, la Mesa de contratación consideró que tal proposición implicaba un incremento en el número de horas ofertadas, modificando así el pliego, que fija el número de horas, y sostiene que su oferta se ajustaba al pliego y por tanto no ofrecía el número de horas a que se refiere la Administración.

Afirma que la división del precio del contrato (1.599.000 euros) entre la oferta económica (432 euros por jornada) da como resultado un total de 3.701 jornadas, que es el número de jornadas que se entendió ofertado, lo que constituye, a su juicio, un indebido incremento del número de jornadas a 3.701, cuando dicho precio fue ofertado para 1.197 jornadas, que son las identificadas en el PCAP.

Para AUREN esto no sólo supone una distorsión de su oferta, sino también el criterio de adjudicación “*precio*”, pues la proposición económica solo permite bajar el precio unitario y, al considerar que el presupuesto del contrato debe gastarse íntegro, la Mesa transforma este criterio en “*número de jornadas resultantes del precio ofertado*”.

Defiende que la interpretación que hace la Mesa de que las previsiones establecidas para el cálculo del presupuesto puedan servir para determinar el número de jornadas a prestar, dividiendo el importe total presupuestado entre el precio unitario ofertado, entraría en flagrante contradicción con los apartados 1 y 9 del Cuadro de Características del PCAP, así como con las cláusulas 1 y 2 del PPT, que fijan un

número determinado de jornadas (1.197) y la atención al precio, y no al número de jornadas, como criterio de adjudicación, de manera que el precio total del contrato será su producto, y no el importe presupuestado.

Entiende que todo ello vulnera el principio de “*lex contractus*” y los principios de igualdad y transparencia.

Por otro lado, señala una incoherencia interna del acto de exclusión, pues la Mesa aceptó que la oferta no era anormalmente baja al resultar justificada, sin embargo, simultáneamente la excluye por falta de medios personales suficientes.

Por todo ello solicita la nulidad de la exclusión y la adjudicación del contrato en su favor.

2. - Alegaciones del órgano de contratación.

El informe de oposición al recurso emitido por el órgano de contratación defiende que la exclusión es ajustada a Derecho.

Alega que la recurrente, en sus alegaciones, parece obviar que, en el apartado 4 de la cláusula 1 del PCAP tras la determinación de un coste de 1.000 euros (IVA excluido) por jornada de consultoría o formación a realizar, recoge expresamente:

“Este se considera el precio base de la jornada de consultoría o formación, y se tendrá en cuenta para el criterio objetivo de adjudicación del contrato, de manera que la base imponible del contrato permanecerá inalterable, y una oferta más baja en el precio de la jornada de consultoría o formación redundará en un mayor número de jornadas a realizar por la adjudicataria”.

Siguiendo esta prescripción, en el informe técnico relativo a la justificación de las ofertas anormalmente bajas, se dividió el precio del contrato (1.599.000 euros) entre la oferta económica hecha por la empresa recurrente (432 euros), obteniendo como resultado un total de 3.701 jornadas de consultoría o formación. En dicho informe se

ponía de manifiesto que, teniendo en cuenta la jornada anual de 1.760 horas, cada persona no podría hacer más de 251 jornadas de consultoría o formación anuales, de 7 horas cada una de ellas, por lo que el equipo planteado por la empresa recurrente, con 3 personas únicamente, sería claramente insuficiente.

En el propio recurso se menciona ese equipo de 3 personas, como dato no controvertido por la recurrente. Además, ese equipo de 3 personas resulta claramente insuficiente incluso para la realización de las 1.599 horas jornadas de consultoría o formación anuales previstas en los pliegos, lo que también parece obviarse en las alegaciones de la empresa recurrente.

Por otra parte, señala que el apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP no requiere compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios materiales y personales, por lo que, en caso de adjudicación del contrato a la empresa recurrente, no habría modo de que el órgano de contratación pudiese poner de manifiesto la insuficiencia del mencionado equipo de 3 personas y, por tanto, la necesidad de su ampliación, al objeto de dar cumplimiento a las jornadas de consultoría y formación ofertadas.

Esta circunstancia motivó que, en el mencionado informe técnico se pudiese de manifiesto esta circunstancia, que dio lugar al acuerdo de la Mesa de contratación de excluir de la licitación a la oferta de la recurrente, al considerar la concurrencia de un incumplimiento claro, objetivo, manifiesto y patente del PPT, deducido claramente de la documentación justificativa de la oferta.

Sexto. - Consideraciones del Tribunal

Vistas las alegaciones de las partes, la cuestión a dilucidar es si la interpretación que ha hecho la Mesa a la hora de examinar la justificación de la viabilidad de la oferta de la recurrente incura en valores anormales o desproporcionados, al interpretar los pliegos de la licitación para transformar el precio unitario ofertado por AUREN en un

mayor número de jornadas hasta agotar el presupuesto total, resulta ajustada a Derecho y, en consecuencia, si la exclusión de la oferta de la recurrente por inviabilidad técnica, al considerarse que con el personal propuesto no puede cumplir ese número de jornadas, se basa en una interpretación legítima del pliego o en una alteración ex post de sus condiciones esenciales.

Al objeto de resolver la controversia planteada, debemos acudir a los pliegos que rigen la licitación.

En este sentido, el PPT define el contenido de la prestación en su cláusula 2, estableciendo que *“debe realizarse un total de 1.599 jornadas de consultoría y formación, desglosadas en 1.197 jornadas de consultoría y 402 jornadas de formación, según la planificación aprobada por la persona responsable del contrato, y teniendo en cuenta una duración de 7 horas por jornada de consultoría o de formación.”*

La cláusula 4 del mismo pliego, denominada *“medios personales y materiales”* estipula lo siguiente:

“La empresa adjudicataria debe disponer de personal técnico capacitado y en número suficiente para llevar a cabo las actividades de auditoría y formación que constituyen el contenido y alcance de este contrato.

La empresa adjudicataria debe asignar a la ejecución de este contrato a una persona directora de los trabajos, con titulación universitaria, formación específica en materia de calidad y experiencia mínima de tres años en la realización de actividades de consultoría similares a las que constituyen el objeto de este contrato, así como con experiencia mínima de un año en la dirección de equipos de trabajo. Esta persona debe dirigir, supervisar y coordinar la realización y el desarrollo de los trabajos, así como proponer las líneas de trabajo y actuaciones necesarias a lo largo de la ejecución del contrato, y llevar a cabo las actividades de coordinación recogidas en la cláusula 2.1.”

Por su parte, el PCAP, en su Cláusula 1 *“Características del contrato”* establece en sus apartados 4 y 9, lo siguiente:

“4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA.

tipo de presupuesto: cuantía máxima determinada.

sistema de determinación del presupuesto: precios unitarios

(...)

se estima:

. en 7 horas el número de las que componen una jornada de consultoría o formación.

. en 1.000 euros el precio de mercado de una jornada de consultoría en el ámbito la norma UNE 158101. este importe se considera el precio base de dicha jornada, a efectos de los criterios de baremación.

(...)

en consecuencia, teniendo en cuenta los costes del mercado, se considera procedente la determinación de un coste de 1.000 euros (IVA excluido) por jornada de consultoría o formación a realizar, considerando incluido en el mismo tanto la suma de los costes directos (incluidos los laborales) e indirectos (943,40 euros), como un beneficio industrial del 6% (56,60 euros).

1.197 jornadas de consultoría x 1.000 euros/jornada = 1.197.000 euros

402 jornadas de formación x 1.000 euros/jornada = 402.000 euros

total = 1.599.000 euros

este se considera el precio base de la jornada de consultoría o formación, y se tendrá en cuenta para el criterio objetivo de adjudicación del contrato, de manera que la base imponible del contrato permanecerá inalterable, y una oferta más baja en el precio de la jornada de consultoría o formación redundará en un mayor número de jornadas a realizar por la adjudicataria.”

“9. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

1. Criterio relacionado con los costes: el precio unitario hasta 70 puntos

La puntuación obtenida será la resultante de interpolar linealmente entre la oferta más baja del precio de cada jornada de consultoría o formación, a la que se asignará la máxima puntuación (70 puntos) y el precio base, al que se asignará la mínima puntuación (0 puntos).

(...)

2.1. Asignación a la ejecución del contrato de, al menos, una persona con experiencia mínima de tres años en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia (por ejemplo, en medicina o enfermería especializadas en geriatría; psicología; trabajo social o similar). Concreción de los medios personales exigidos en la cláusula 4 del PPTP.

Se asignará la máxima puntuación (15) a la oferta presentada por la empresa que justifique la asignación a la ejecución del contrato de, al menos, una persona con experiencia mínima de tres años en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia.

2.2. Experiencia de la persona designada como directora de los trabajos en la realización de actividades de consultoría o certificación en la norma UNE 158101. Concreción de los medios personales exigidos en la cláusula 4 del PPTP.

Se otorgará la máxima puntuación (10) a la oferta presentada por la empresa que justifique la experiencia de la persona designada como directora de los trabajos durante un mayor número de años, hasta un máximo de 5 años, y se asignará la puntuación proporcional al resto de las ofertas.

2.3. Experiencia de la persona designada como directora de los trabajos en la realización de actividades de consultoría similares a las que constituyen el objeto del contrato, teniendo en cuenta el CPV principal y los adicionales, distintos de los relacionados con la norma UNE 158101. Ampliación de los tres años de experiencia mínima exigidos en la cláusula 4 del PPTP.

Se otorgará la máxima puntuación (5) a la oferta presentada por la empresa que justifique la experiencia de la persona designada como directora de los trabajos durante un mayor número de años, hasta un máximo de 10 años, y se asignará la puntuación proporcional al resto de las ofertas.”

El Anexo I al PCAP, que contiene el modelo de oferta económica señala que los licitadores realizarán la baja sobre el precio unitario, sin modificar el precio total y debe rellenarse en función del precio unitario por cada licitador, con un precio total fijo ya consignado en el propio modelo de 1.599.000,00 euros.

Y el Anexo V, que contiene el modelo de criterios de adjudicación valorables de forma automática, se presentará por los licitadores rellenando las casillas correspondientes en función de la experiencia ofertada para el perfil de director de los trabajos asignados a la ejecución del contrato.

De la regulación contenida en las cláusulas transcritas, pueden extraerse las siguientes consideraciones:

1. El PPT establece la realización de un total de 1.599 jornadas de consultoría y formación, que no aparece formulado como estimación, previsión o referencia, sino como una obligación que determina el objeto del contrato.
2. El PCAP define el presupuesto del contrato como un límite máximo de gasto (1.599.000 euros), el precio ofertado como unitario (euros/jornada) y establece que el número de jornadas a realizar finalmente, sobre las 1.599 obligatorias, dependerá del precio unitario ofertado, pues ello permitirá consumir el presupuesto máximo.
3. En lo que se refiere al personal, el PPT estipula, como prescripción obligatoria, que la empresa adjudicataria debe disponer de personal técnico capacitado y en número suficiente para llevar a cabo las actividades de auditoría y formación que constituyen

el contenido y alcance de este contrato y que la empresa adjudicataria debe asignar a la ejecución de este contrato a una persona directora de los trabajos. El PCAP no prevé compromiso de adscripción de medios.

4. A partir de la oferta presentada por los licitadores, se conoce el precio unitario por jornada y la experiencia del perfil asignado a la ejecución del contrato como director de los trabajos, pero no el personal ofertado por el licitador para el cumplimiento de lo preceptuado en la cláusula 4 del PPT.

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal que el contrato consiste en ejecutar las 1.599 jornadas obligatorias al precio unitario y que esa oferta permitirá realizar más jornadas, a ese mismo precio ofertado, hasta consumir el presupuesto máximo. Es decir, una baja en el precio unitario redundará en un mayor número de jornadas. Lo anterior significa que el precio unitario reduce el coste de cada jornada y, por tanto, el presupuesto máximo permite financiar más jornadas. Por otro lado, la empresa adjudicataria debe asignar a la ejecución del contrato, personal capacitado y en número suficiente para atender su contenido y, como mínimo, a un perfil de director de los trabajos, con la experiencia ofertada como criterio de adjudicación.

Es a partir de la justificación de la baja ofertada por la recurrente, incurso en presunción de anormalidad, y no a partir de la oferta presentada a la licitación, cuando la Mesa de contratación conoce la composición del equipo asignado por la licitadora ahora recurrente, pues dicho documento, a la hora de justificar los costes salariales del personal, identifica tres perfiles como personal asignado a la ejecución del contrato.

Y, en el seno del procedimiento contradictorio tramitado al amparo del artículo 149 de la LCSP, la Mesa, según consta en el acta de la sesión de 20 de abril de 2026, tras considerar debidamente justificado el precio ofertado, excluye a AUREN al entender que el equipo planteado, de 3 personas, sería claramente insuficiente, recogiendo el acta textualmente:

“La oferta presentada por AUREN CONSULTORES SP S.L.P. (B87352340), se considera debidamente justificado el precio ofertado

No obstante, lo anterior, la Mesa acuerda la exclusión de AUREN CONSULTORES SP S.L.P. (B87352340) por incumplimiento de las cláusulas 2 y 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). En particular, la cláusula 2 del PPT establece literalmente que:

(...)

‘Para ello, debe realizarse un total de 1.599 jornadas de consultoría y formación, desglosadas en 1.197 jornadas de consultoría y 402 jornadas de formación, según la planificación aprobada por la persona responsable del contrato, y teniendo en cuenta una duración de 7 horas por jornada de consultoría o de formación.’

Tal y como señala el informe DG de Evaluación, Calidad e Innovación, el equipo propuesto por la licitadora resulta manifiestamente insuficiente para la correcta ejecución del contrato en los términos exigidos en el PPT.

“Por otra parte, la división del precio del contrato (1.599.000 euros) entre la oferta económica hecha (432 euros) da como resultado un total de 3.701 jornadas de consultoría o formación, y, teniendo en cuenta la jornada anual de 1.760 horas, cada persona no podría hacer más de 251 jornadas de consultoría o formación anuales, por lo que el equipo planteado, con 3 personas únicamente, sería claramente insuficiente”. En este caso, el incumplimiento del PPT debe determinar la exclusión de la licitadora porque se trata de un incumplimiento claro, objetivo, manifiesto y patente y se deduce claramente de la justificación de su oferta.

Por todo ello, la Mesa concluye que el licitador no acredita contar con los medios personales suficientes para la adecuada ejecución de las tareas previstas en el pliego que rige la contratación y determina la exclusión de AUREN CONSULTORES SP S.L.P. (B87352340) del procedimiento de licitación.”

En este contexto, la recurrente alega una incoherencia interna del acto de exclusión, pues la Mesa aceptó que la oferta no era anormalmente baja al resultar justificada, sin embargo, simultáneamente la excluye por falta de medios personales suficientes.

Procede analizar, por tanto, si resulta contradictorio aceptar que la oferta de AUREN es económicamente viable, pero pueda excluirse por falta de medios personales suficientes, al fundarse la exclusión acordada por la Mesa en la incapacidad del licitador para ejecutar el volumen de jornadas determinado por el precio unitario de la oferta.

Al respecto, desea aclarar este Tribunal que una oferta puede ser económicamente justificable pero técnicamente inviable, pues la viabilidad económica no convalida una incorrecta configuración técnica de la oferta. En este sentido, el artículo 149.4 de la

LCSP, en su último párrafo, permite rechazar ofertas no sólo por ser económicamente inviables, sino por fundamentarse en *“prácticas inadecuadas desde un punto de vista técnico”*.

Ahora bien, sentado lo anterior, debe aclararse que, señalando el acta de la Mesa anteriormente transcrita que el incumplimiento claro, objetivo, manifiesto y patente “se deduce claramente de la justificación de su oferta”, la oferta debió ser rechazada no por la Mesa de contratación, sino por el órgano de contratación, que es quien ostenta esta competencia.

De acuerdo con el artículo 149.4 LCSP corresponde a la Mesa identificar las ofertas incursas en presunción de anormalidad, requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta; evaluar toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo, y elevar de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación.

Por su parte, el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes emitidos, si estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150 LCSP.

Añade el artículo 149.6 LCSP que *“en general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica”*.

En virtud de lo anterior y, sin entrar este Tribunal en el análisis del incumplimiento del PPT por parte de la oferta de AUREN, considera este Tribunal que el acto de exclusión se ha adoptado por órgano que no ostenta la competencia; ya que la Mesa si estimó que la oferta de la recurrente con el precio ofertado no podía cumplir con las exigencias del PPT, debió no estimar justificada la viabilidad de su oferta y proponer al órgano de contratación su exclusión al amparo del procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP.

Procede, en consecuencia, anular el acuerdo de exclusión de la oferta de AUREN adoptado por la Mesa de contratación que resulta objeto del presente recurso y retrotraer las actuaciones del procedimiento al momento en que la Mesa debió elevar propuesta de rechazo o aceptación de la oferta de la recurrente al órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en dicho precepto.

En consecuencia, considera este Tribunal que procede la estimación parcial del recurso presentado y la anulación del acuerdo impugnado.

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal

ACUERDA

Primero. - Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por AUREN CONSULTORES SP, S.L.P., contra el acuerdo adoptado por la Mesa de contratación en sesión de 20 de abril de 2026, de exclusión de su oferta de la licitación del contrato denominado "*consultoría y formación en la norma UNE 158101 para las residencias de personas mayores 2026-2027*", licitado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con número de expediente 089/2026 (A/SER-051607/2025).

Segundo. - Levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación adoptada por este Tribunal mediante Resolución de MMCC nº 103/2026, de 22 de mayo de 2026., de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.3 de la LCSP.

Tercero. - Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58 de la LCSP.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las personas interesadas en el procedimiento.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 59 de la LCSP.

De conformidad con el artículo 57.4 de la LCSP, el órgano de contratación deberá dar conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a esta resolución.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Firmado digitalmente por: DIAZ BENITO PEDRO
Fecha: 2026.06.05 13:42